

INFORME SOBRE VULNERAÇÃO DE DIREITOS E LIBERDADES

Enaltecimento do terrorismo e dissolução de Causa Galiza e Ceivar.

Procedimento Abreviado 120/2015

Julgado Central de Instrução nº 6 de Madrid

1.- Introdução: “*independentismo radical galego*”

A investigação policial denominada “Operação Jaro” e o posterior procedimento judicial aberto contra 12 membros das organizações políticas CAUSA GALIZA e CEIVAR por delitos de terrorismo seguido no Julgado Central de Instrução nº 6 de Madrid, Procedimento Abreviado 120/2015, constitui, com certeza, mais um exemplo de gestão punitiva da atividade política independentista por parte do Estado espanhol. Isto significa, portanto, o uso de medidas penais de exceção como forma de administrar o conflito político, cujo risco principal é, como sinala CANCIO MELIÁ (2010:29), a extensão de sanções também excepcionais a condutas de crítica e confronto político, sob a ameaça, em atenção à definição que oferece a doutrina do Tribunal Supremo (por todas, STC 199/1987), da subversão da ordem constitucional ou alteração da paz pública. E conquanto o Alto Tribunal admita que a procura da subversão do sistema seja legítima dentro de uma sociedade democrática, o relevante em termos penais são os meios violentos empregados para a sua consecução. Ora, como veremos no presente caso, seguindo a atual política criminal antiterrorista, o controlo penal de atividades políticas não violentas também tem sido objeto de criminalização. Veja-se, por todas, a STS 303/2012, quando afirma: “*Una organización terrorista que persigue fines pseudo-políticos puede intentar alcanzarlos no solo mediante actos terroristas, sino también a través de actuaciones que, en sí mismas consideradas, no podrían ser calificadas como actos terroristas (movilizaciones populares no violentas, actos de propaganda política no violentas,*



concienciación popular de la importancia de los fines, etc.) lo que se aprecia es la existencia de una organización terrorista que ha llegado a adquirir gran complejidad, que utiliza para la consecución de sus fines, no solo la violencia”.

Neste sentido, aliás, tem especial interesse notar que o alargamento da noção de terrorismo para a atividade política desenvolvida por cidadãos e cidadãs galegas cobrou uma notável relevância desde meados da década de 2000 até 2015/2017, em que teve lugar a “Operação Jaro”. Neste período, atendendo aos dados fornecidos pola Europol (TE-SAT, 2007-2018), 57 pessoas foram processadas por distintos delitos de terrorismo ligados ao chamado, pola Fiscalía General del Estado, de “*independentismo radical galego*” (Fiscalía General del Estado, Memória, 2009-2017). E tem o seu ponto álgido no Sumario 1/2012, seguido no Julgado Central de Instrução nº 6 de Madrid, que finalizou com Sentença do Tribunal Supremo (STS 293/2014, de 9 de abril) condenando, pola primeira vez neste ciclo, a quatro galegos como integrantes de uma organização terrorista denominada RESISTÊNCIA GALEGA, que, citando a própria sentença o objetivo desta organização “*es lograr la independencia del territorio histórico de Galicia respecto de España, subvirtiendo para ello el orden constitucional, a fin de establecer unas señas de identidad gallega, en la defensa de la tierra y del medio ambiente; para lo cual justifican el empleo de la violencia contra las personas y los bienes como único medio de lograr sus propósitos*”.

Uma escalada policial e judicial contra membros e simpatizantes do independentismo galego que acontece, de jeito paradigmático, no momento de menor incidência no Estado espanhol da violência terrorista nos últimos 20 anos e, nomeadamente, após o cese definitivo da principal organização terrorista identificada polo Estado, a ETA. Neste contexto, é, para tanto, ampliado o conjunto de medidas de exceção desenvolvidas na persecução contra a atividade da ETA contra outros movimentos políticos de contestação, caso do independentismo galego ou do



movimento anarquista por resenhar os mais destacáveis; produzindo, assim, uma enorme elasticidade da conceitualização das condutas típicas do terrorismo para atividades não contempladas no catálogo de crimes terroristas no cenário anterior a desapareção do terrorismo basco (COLMENERO e BRANDARIZ, 2019).

2.- CAUSA GALIZA e CEIVAR: atividade “terrorista” pública, pacífica e democrática

2.1.- Condutas imputadas: atividade política não violenta

As pessoas acusadas neste procedimento judicial são responsabilizadas, essencialmente, pola constituição, gestão e as atividades realizadas polas organizações políticas CAUSA GALIZA e CEIVAR, as quais teriam desenvolvido uma série de atos de apoio, elogio e justificação da atividade de carácter terrorista do grupo denominado como RESISTÊNCIA GALEGA y dos seus membros, seguindo o Auto de 5 de novembro de 2019 do Julgado Central de Instrução nº6 de Madrid.

No mesmo descrevem-se, entre outras, as atividades delitivas que seguem:

a) CAUSA GALIZA:

- *“celebración del “Dia da Patria Galega” y del “Dia da Galiza Combatente” se promovía el ensalzamiento y justificación del ideario de la organización terrorista RESISTÊNCIA GALEGA, y la de sus miembros detenidos o condenados por actividad terrorista.*
- *CAUSA GALIZA desarrollaba actividades concretas orientadas a la organización y promoción de actos de apoyo a los miembros de la organización terrorista RESISTÊNCIA GALEGA, así como a las organizaciones terroristas*



antecesoras de ésta, y además participaba de forma activa en los actos relacionados con el independentismo radical gallego, en los que intervenía con idénticas finalidades.

- *Entre estos actos, se enmarcaría la campaña de apoyo a la miembro de RESISTÊNCIA GALEGA María OSORIO LÓPEZ, o los distintos comunicados en apoyo a los miembros detenidos o presos de la organización terrorista.*
- *CAUSA GALIZA mantenía una relación con colectivos del ámbito del independentismo radical y violento a nivel nacional, al objeto de colaborar con ellos y expresar su apoyo y solidaridad con las causas que defendían.”*

b) CEIVAR

- *“Organización, promoción y publicitación de los actos de homenaje, enaltecimiento y justificación de los terroristas gallegos que permanecieran dentro de la disciplina de la organización terrorista a su salida de prisión.*
- *Organización y difusión de actos públicos de apoyo a los miembros de RESISTÊNCIA GALEGA con carácter periódico, como las concentraciones de los últimos viernes de cada mes, u ocasionales con motivo de su asistencia a juicios o traslados penitenciarios.*
- *Organización y difusión de concentraciones y marchas a las prisiones con motivo de la celebración de la “cadena humana”.*
- *Participación activa en los actos relacionados con el independentismo gallego y la conmemoración de diferentes efemérides del ámbito nacionalista radical tales como el Día de Galiza Combatiente, el Día de la Patria Galega o el Día Internacional de los Presos Políticos.*
- *Utilización de su entramado comunicativo para difundir públicamente los comunicados del Colectivo de Presos de RESISTÊNCIA GALEGA y las cartas y escritos de sus miembros en prisión.*



- *Cooperación con otras formaciones nacionalistas radicales y violentas, dándole apoyo y difundiendo muestras de solidaridad con los detenidos de dichas organizaciones.”*

Como resultado do anterior, os feitos descritos são constitutivos dos delitos que a continuación se indican:

a) Delito de pertença ou organización criminal para a comisión de delitos de enaltecimento de organización terrorista e dos seus membros, tipificado no art. 570 bis 1 do Código Penal:

Artículo 570 bis

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

b) Delito de enaltecimento do terrorismo, tipificado no art. 578.1, 2 e 4 do Código Penal:

Artículo 578.

1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o



contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.*
- b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores.*

As penas que se solicitam para os acusados são, por cada delito de enaltecimento, a pena de 2 anos de cárcere, a pena de 8 anos de inabilitação absoluta e inabilitação especial para o direito de sufrágio passivo durante o tempo da condena, e a pena de 20 meses de multa com quota diária de 20 euros, com responsabilidade pessoal subsidiária no caso de insolvência conforme o art. 53.2 do Código Penal e as custas processuais.

Assim mesmo, de conformidade com o art. 570 quater do Código Penal solicita-se a dissolução das organizações políticas CAUSA GALIZA e CEIVAR.

Artículo 570 quáter

1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código.

2. Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena



de privación de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4.ª del artículo 8.

3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.

4. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos.

2.2.- Direitos e liberdades vs. terrorismo: uma tensão constante

Resulta evidente que os delitos assinalados constituem um limite aos direitos fundamentais e liberdades públicas reconhecidos no nosso ordenamento jurídico e, por tanto, situam-se na fronteira do modelo democrático. No entanto, o objeto deste relatório não é, com certeza, uma análise pormenorizada da perspectiva jurídico-penal dos delitos imputados neste procedimento aos membros das organizações políticas CAUSA GALIZA e CEIVAR; mas sinalar os riscos da *vis expansiva* dos delitos de terrorismo como mecanismo punitivo de atividades políticas de caráter crítico não violento, que, assim sendo, ameaçam com traspasar do umbral da “*luta antiterrorista*”. Em consequência, aquilo que procuramos é assinalar a tensão que entre os delitos de terrorismo imputados e os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, de manifestação, de associação, de reunião ou mesmo de participação



pluralismo político, pudera existir, advertindo a improcedência da restrição dos mesmos no quadro de um Estado verdadeiramente democrático.

Tem sido, pois, o Tribunal Constitucional que tem sinalado (SSTC 6/2000, 49/2001, 181/2006, 235/2007, 79/2014), que a liberdade de expressão não é apenas a manifestação de pensamentos e ideias, mas inclui a crítica ideológica, política e económica, mesmo quando ela procure transformar ou perturbar a ordem social conforme ao pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não há sociedade democrática. Porém, a realidade jurídica, a pesar de tão rotunda afirmação, tem sido em multidão de ocasiões outra bem distinta. Como referencia PORTILLA CONTRERAS (2017: 88), nos últimos tempos, temos assistido a uma elasticidade dos delitos de terrorismo que tem provocado uma das maiores vulnerações dos direitos e liberdades públicas reconhecidos no ordenamento jurídico. E, em concreto, a expansão do delito de enaltecimento do terrorismo tem constituído um verdadeiro limite à liberdade de expressão e manifestação, veja-se como exemplo as mediáticas “Operação Aranha”, o “Caso Cassandra” ou “La Insurgencia”. De tal forma, ainda tendo caracterizado a jurisprudência constitucional amplamente o direito à liberdade de expressão como garantia de uma instituição política fundamental e requisito para o bom funcionamento do Estado (STC 12/1982), são múltiplos os casos de criminalização do discurso público e político realizado por pessoas e grupos críticos (MIRÓ LLINARES, 2017).

Neste sentido, como recolhe RIDAO MARTÍN (2018), seguindo a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, as restrições de tipo jurídico-formal que puderem existir para a manifestação pública de ideias ou programas políticos, mesmo serem eles de natureza antisistémica (STEDH Karácsony e outros c. Hungria, de 17 de maio de 2016, entre outras), estas não podem restringir, em algum modo, o legítimo debate político democrático (STEDH Bédat v. Suíça, de



29 de março de 2016). De tal sorte, seguindo o mesmo trabalho de RIDAO MARTÍN, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem amparado apenas limitações, com base no art. 17 do Convénio Europeu de Direitos Humanos, quando estas tratarem de doutrinas totalitárias (STEDH KPD v. Alemanha de 1957), discursos revisionistas do Holocausto (STEDH Honsik v. Áustria de 1989, entre outras) ou discriminação racial (STEDH Norwood v. Reino Unido de 2004). Em suma, aquilo que verificamos é uma forte tensão entre o delito de enaltecimento e a liberdade de expressão e manifestação na realização de atividades dentro debate político, como no presente caso. Mas para além disto, a acusação de um delito como o previsto no art. 570 quáter do Código Penal, pola que se solicita a pena de dissolução das organizações políticas nomeadas, atenta frontalmente contra outra série de direitos fundamentais, a saber, os direitos de associação, de reunião, de participação e pluralismo político.

Em concordância com a Declaração Universal de Direitos Humanos, *ex art. 20*, a Constituição espanhola recolhe a liberdade de associação como um direito fundamental no seu art. 22, com base no reconhecimento do pluralismo político como valor superior do ordenamento jurídico estabelecido no art. 1.1. da Constituição. Neste sentido, resulta uma questão pacífica assinalar, com GARRO CARRERA (2009: 330), que o direito de associação constitui o cerne da proclamação do Estado social e democrático de Direito. Assim sendo, qualquer limitação deste direito põe em causa o pluralismo e a participação política, devendo, sempre, ser respeitado na adopção de qualquer medida o seu conteúdo essencial. Seguindo esta interpretação, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos entende que a restrição do direito de associação e, nomeadamente, o direito de constituição de organizações políticas atuantes no debate público, porquanto é o instrumento fundamental da expressão da pluralidade ideológica democrática, deve ser compatível, sempre, com o previsto art. 11 do Convenio Europeu de Direitos Humanos (STEDH Freedom and Democracy Party v. Turkey, de 8 de dezembro de 1999). Deste jeito, seguindo a leitura deste autor, a



dissolução de uma organização política acarreta sempre um risco de contaminação antidemocrático na determinação das causas que justificam a expulsão da concorrência política de uma concreta opção partidária, mais ainda quando, esta medida tem sido usada historicamente para banir à dissidência e à oposição política (GARRO CARRERA, 2009: 333, citando GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 1977). Portanto, a intervenção sobre um grupo, associação ou ator sócio-político crítico com o sistema, identificando como perigoso para as instituições do Estado e para os direitos e liberdades públicas (STEDH Refah Partisi the Welfare Party'et al v. Turkey, de 31 de julho de 2001; Yazar et al v. Turkey), não pode fundamentar-se em valorações abstratas ou meras hipóteses delitivas, mas sobre feitos muito graves, de natureza objetiva e de risco real para a ordem constitucional.

De contrário, a criminalização de um grupo político pelas suas simples manifestações ou atividades públicas não violentas e dentro do quadro legal do Estado, como observamos com as organizações acusadas neste processo judicial, acarreta gravíssimos problemas em termos democráticos. Pois, a passagem de uma atividade de natureza política crítica própria de qualquer grupo dissidente, para uma atividade catalogada como terrorista, quando se tratar de pessoas e/ou coletivos que não fazem uso de médios ilegais ou violentos para a sua expressão ou manifestação, supõe, em definitivo, a expansão de uma presunção geral de participação terrorista a partir de um concreto ideário político sem encaixe na sociedade democrática (CANCIO MELIÁ, 2007).

3.- Conclusão: quebra da liberdade de expressão, do direito de associação e da participação política das pessoas e grupos acusados

Como resultado do anterior, podemos afirmar, a modo de síntese, o que segue:



a) Nos últimos tempos assistimos a uma progressiva expansão da noção de terrorismo alargando este conceito para condutas até o momento consideradas expressões dos direitos e liberdades fundamentais.

b) A definição de organização terrorista em particular, e as condutas típicas do conjunto dos delitos de terrorismo em geral, são despossuídas da sua componente jurídica essencial, isto é, a conduta violenta, que não se configura como imprescindível do ponto de vista penal.

c) Atividades clássicas do confronto público e da dissidência política, tais como as mobilizações e as manifestações populares, os atos de propaganda política, etc., são qualificados, seguindo esta tese, como atividades de natureza terrorista mesmo sendo elas públicas, pacíficas e ao amparo da legalidade vigente.

d) Testemunhamos, logo, uma extensão da ilicitude em condutas não propriamente delitivas, que supõe uma vulneração dos princípios de legalidade e proporcionalidade por serem determinados pela conceição teológica ou finalista das mesmas em ordem a subverter o quadro constitucional, mesmo pacífica e democraticamente.

e) Assim sendo, quebra-se o respeito aos direitos e liberdades fundamentais dos imputados, em concreto, dos direitos à liberdade de expressão, manifestação, associação, reunião e aos direitos de participação política.

f) Os referidos direitos e liberdades são a base do Estado social e democrático de Direito que tem no pluralismo político o valor superior do seu ordenamento jurídico.



g) Por consequência, a aplicação de medidas de legislação de exceção vocacionadas à criminalização de condutas como as descritas, devem interpretar-se seguindo o princípio *pro libertate* e respeitando as máximas garantias para a sua restrição.

4.- Bibliografia

- CANCIO MELIÁ, M. (2011), “Delitos de organización: Criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, en DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO, *Estudios sobre las reformas del Código penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero*, Civitas. Navarra.
- CANCIO MELIÁ, M. (2007), “Algunas reflexiones preliminares sobre los delitos de terrorismo: eficacia y contaminación”, em AAVV, *Derecho Penal de Excepción. Terrorismo e inmigración*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp.161-170.
- CANCIO MELIÁ, M. (2010), *Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto*, Reus, Madrid
- COLMENERO, B. e BRANDARIZ, J.A. (2019), “Reinventing counter-terrorism tactics and practices in the post-ETA Spanish criminal justice system”, en *Studi Culturali*, Ano XVI, N°1.
- CUERDA ARNAU, M.L. (2018), “Terrorismo y libertades políticas”, disponível em <https://core.ac.uk/download/pdf/61388140.pdf>
- EUROPOL, Informe TE-SAT, 2007-2018, disponível em <https://www.europol.europa.eu/tesat-report>
- GALÁN MUÑOZ, A. (2018), “El delito de enaltecimiento terrorista. ¿Instrumento de lucha contra el peligroso discurso del odio terrorista o mecanismo represor de repudiables mensajes de raperos, twitteros y titiriteros?”, em *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 38.



- GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (1977), *Asociaciones ilícitas en el código penal*, Bosch, Barcelona.
- GARRO CARRERA, E. (2009), “Libertad de asociación y terrorismo. Análisis de casos fronterizos”, em *Aplicación de la normativa antiterrorista*, Universidad del País Vasco, Bilbao, pp. 324-356.
- MEMÓRIA DA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009-2017, disponível https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html
- PORTILLA CONTRERAS, G. (2017) “El retorno de la censura y la caza de brujas anarquistas”, en MIRO LLINARES, F., *Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y la radicalización en Internet*, Marcial Pons. Madrid, p. 88.
- RIDAO MARTÍN, J. (2018), “Temor a la libertad de expresión. Los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona como ejemplo”, em *Congreso Acoes XVII. Seguridad y libertad en el sistema democrático*.

Galiza, marzo 2020

